



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

Control de convencionalidad referente a los derechos humanos de la mujer y su aplicación por parte del Estado colombiano*

Gina Paola Jiménez Poveda*

Resumen

El Co. Co. es un criterio surgido en el SIDH y se consolidó como un mecanismo orientado a que los Estados cumplan con los acuerdos suscritos de asegurar el respeto y protección de los DDHH. El SDIH y los Instrumentos Internacionales del Sistema Universal, a través de los años han reconocido la transgresión de los DDHH de las mujeres, por motivos de desigualdad, discriminación y falta de reconocimiento político. Por ello han aunado esfuerzos para crear normatividad tendiente a la erradicación de violencias contra la mujer y su efectiva protección. En el caso de Colombia, con i) la ratificación de diversos tratados internacionales orientados a suprimir la violencia hacia las mujeres, ii) la expedición de la Constitución de 1991, iii) la incorporación del bloque de constitucionalidad, y iv) la implementación de normas y mecanismos jurídicos tendientes a materializar sus objetivos, han hecho posible la evolución de los DDHH de las mujeres y la erradicación de todo tipo de violencias. Se determinará entonces si el Estado Colombiano cumple de manera efectiva e integral con el control de convencionalidad respecto a la defensa de los DDHH de las mujeres. Para esto se desarrollarán tres ejes temáticos así, i) se analizará el significado del control de convencionalidad, ii) se identificarán los DDHH de las mujeres y las normas de carácter internacional que propenden por su protección, y iii) se establecerán los deberes adquiridos por el Colombia y los mecanismos jurídicos adoptados para erradicar de manera efectiva la violencia hacia de la mujer, para llegar a una conclusión.

Palabras Clave: control de convencionalidad, derechos humanos, mujer, género, violencia, violencias basadas en género, prevención, atención, protección.

* Artículo de Reflexión presentado como Trabajo de Grado para optar al Título de Maestría en Derechos Humanos y DIH. dirigido por la Dra. Ivonne Patricia León; en codirección con la Dra. Natalia Chacón, Docentes de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C. 2021

* **Gina Paola Jiménez Poveda.** Abogada titulada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Especialista en Gobierno y Desarrollo de los Entes Territoriales. Optante al título Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y DIH de la Universidad Católica de Colombia. E – mail: gpijimenez77@hotmail.com.

Control of conventionality regarding the human rights of women and their application by the colombian state

Abstract

The Co. Co. is a criterion that emerged in the SIDH and was consolidated as a mechanism aimed at ensuring that the States comply with the agreements signed to ensure the respect and protection of human rights. The SDIH and the International Instruments of the Universal System, over the years have recognized the transgression of women's human rights, for reasons of inequality, discrimination and lack of political recognition. For this reason, they have joined forces to create regulations aimed at the eradication of violence against women and their effective protection. In the case of Colombia, with i) the ratification of various international treaties aimed at suppressing violence against women, ii) the issuance of the 1991 Constitution, iii) the incorporation of the constitutionality block, and iv) the implementation of regulations and legal mechanisms aimed at materializing its objectives have made possible the evolution of women's human rights and the eradication of all types of violence. It will then be determined whether the Colombian State effectively and comprehensively complies with the conventionality control regarding the defense of women's human rights. For this, three thematic axes will be developed, i) the meaning of conventionality control will be analyzed, ii) the human rights of women and the international norms that promote their protection will be identified, and iii) the duties acquired by Colombia and the legal mechanisms adopted to effectively eradicate violence against women, to reach a conclusion.

Keywords: conventionality control, human rights, women, gender, violence, gender-based violence, prevention, attention, protection.

Sumario

Introducción. **1.** Control de Convencionalidad en el SIDH. **2.** Protección de los DDHH de las mujeres a nivel Internacional. **3.** Reconocimiento de los DDHH a las mujeres en Colombia. Conclusiones. Referencias

Introducción

El Control de Convencionalidad (en adelante Co. Co.) se originó en el Sistema Interamericano de Derechos humanos (en adelante SIDH); fue consolidado en el año 1969 como un mecanismo orientado a que los Estados cumplan con los deberes internacionales de prevención, atención y defensa de los Derechos humanos (en adelante DDHH).

Se reconocen dos clases de Co. Co.; el Concentrado, ejercido por los organismos que conforman el SIDH, para analizar la situación que condujo a la vulneración de derechos, una vez se ha hecho uso de los mecanismos de defensa internos y sus efectos son erga omnes; y el Difuso, el cual se ejerce por parte de los jueces nacionales de cada Estado y se materializa con la comparación de normas nacionales e internacionales, en aras de alcanzar la garantía de los DDHH.

El Sistema Universal de DDHH, entendido como el conjunto de normas y órganos internacionales, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encaminadas a la salvaguarda de los DDHH universales; y el SIDH, han considerado que los derechos de las mujeres han sido flagrantemente transgredidos por motivos de desigualdad, discriminación y falta de reconocimiento político; lo que ha motivado un sin número de luchas a nivel mundial con la única finalidad de salvaguardar sus DDHH.

Colombia a través del tiempo, ha ratificado varios tratados internacionales tendientes a la erradicación de las todas las maneras discriminar y violentar a las mujeres, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la “Violencia contra la mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas. 1994); y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también denominada Convención Belem do” (Organización de los Estados Americanos OEA, 1994)

Además, a partir de la creación de la Constitución Política de 1991 se alcanzaron importantes logros en el reconocimiento de los DDHH de las mujeres; y legislativamente se avanzó con la creación de varias normativas, entre ellas la más relevante, la Ley 1257 de 2008, en la que se incorporaron en favor de la mujer, medidas de protección y de atención tendientes a asegurar una vida libre de violencias.

Sin embargo, el censo de violencia hacia la mujer sigue siendo elevado, lo que conlleva a cuestionar **¿Cuáles son las disposiciones normativas y los mecanismos de defensa instituidos por el Estado Colombiano para materializar el control de convencionalidad referido a los DDHH de las mujeres?**

Conforme al precitado cuestionamiento se establecerá de manera concreta si el Estado Colombiano materializa el control de convencionalidad, a través de sus organismos y la ley, a la par que cumple con el compromiso de afirmar la defensa de los DDHH de la mujer.

De igual manera se deberá determinar si existen mecanismos jurídicos que garanticen de manera integral la defensa de los DDHH de la mujer; además de establecerse si las instituciones del Estado Colombiano desde su actividad, propenden por la protección y garantía de estos derechos.

Para cumplir lo anterior **i)** se analizará el significado del Control de Convencionalidad, **ii)** se identificarán cuáles son los DDHH de la mujer y las normas de carácter Internacional de propenden por su protección, **iii)** se establecerán los deberes adquiridos por el Colombia al ratificar los tratados internacionales relativos al amparo de los DDHH de la mujer; los mecanismos jurídicos adoptados por éste a través de sus instituciones para el cumplimiento de los mismos y si dichos mecanismos cumplen de manera eficaz con los estándares internacionales de amparo de Derechos.

1. Control de Convencionalidad en el SIDH

El Co.Co., tuvo su origen en el SIDH; integrado por los Estados Americanos que suscribieron la Carta Americana de DDHH (en adelante CADH), como pilar de garantía de los DDHH a nivel interamericano. Dicho sistema se encuentra integrado por la Corte Interamericana de DDHH (en adelante Corte IDH), que actúa como órgano jurisdiccional de carácter reparativo y por la Comisión Interamericana de DDHH (en adelante Comisión IDH), como órgano cuasi-jurisdiccional de carácter preventivo. (Cubides y Barreto, 2017)

Para conocer el desarrollo que ha tenido el Co.Co. es imperativo examinar dos de sus vertientes, una de origen francés y otra de origen interamericano.

En el caso Francés, se resaltan tres decisiones, la primera de ellas No. 74-54 DC del 15 de enero de 1975, emitida por el Consejo Constitucional Francés y conocida como *Interruption volontaire de grossesse* - Interrupción voluntaria del embarazo, en la que se estableció que la competencia de dicha corporación se reducía a la confrontación del contenido de las normas con la constitución, a lo que se denominó control de constitucionalidad. (Castro, Cubides y Martínez, 2016.)

Lo anterior, entendiendo que es función del Juez Ordinario, adecuar los preceptos contenidos en el de las leyes nacionales con lo preceptuado en el Convenio Europeo de DDHH, por vía de interpretación. (Eto, 2014).

La segunda sentencia en materia del mencionado control, fue proferida por la Corte de Casación francesa, el 24 de mayo de 1975, identificada como “*Société Jacques Vabre*”. En ésta, se estableció que la ley interna debía adecuarse a los tratados internacionales. Con esto se logró establecer una clara distinción entre el control de constitucionalidad y el Co. Co. (Fromont, 2002).

Un tercer pronunciamiento judicial de marcada importancia se dio cuando el Consejo de Estado Francés en 1989, tras analizar una demanda con la que se buscaba la invalidación

de las elecciones del Parlamento Europeo, llegó a la conclusión que los postulados del Tratado de Roma de 1957, tiene prevalencia sobre cualquier ley. Antecedente que da origen al llamado Control difuso, en la medida de que facultó a los jueces de menor jerarquía para que en el caso de presentarse tensión entre leyes y normas convencionales, deben prevalecer siempre estas últimas. (Alonso, 2000).

En el caso Interamericano, en el año 2003, la CIDH, como órgano Jurisdiccional del SIDH, hizo gala de su facultad para emitir sentencias y conceptos, como en el caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, fallo en el que se desarrolló la noción de Co. Co., al afirmarse por parte del Juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente que:

Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio (sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto) y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del Co. Co., que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional. (Corte IDH, Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, Caso Mack Chang vs. Guatemala, 2003, p.165).

En el año 2004 el Juez Sergio García Ramírez, en el Caso Tibi vs. Ecuador, bajo la misma línea conceptual en su voto concurrente, expresó que si en el ordenamiento interno son los Jueces constitucionales los que revisan la constitucionalidad, es entonces el Tribunal Internacional de DDHH, el encargado de decidir sobre la convencionalidad, razón por la cual Corte Interamericana, está facultada para desarrollar esta actividad en el ámbito universal de la mano de los postulados de la convención que le dio origen a la Jurisdicción

Interamericana y que fue ratificada por los Estados parte. (Corte IDH, Voto concurrente razonado Juez Sergio García Ramírez, Caso Tibi vs. Ecuador, 2004).

En el año 2006, a través del caso Vargas Areco vs. Paraguay, se determinó que la Corte IDH, encargada de este control no pretende convertirse en una última instancia, para suscitar controversias que se han adelantado internamente en cada Estado. (Corte IDH, Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, 2006).

En casos como Almonacid Arellano vs. Chile (2006) y Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (2006), la Corte IDH advierte que son los Jueces de cada Estado en todos sus niveles, quienes deben realizar el Co.Co.; contrastando las normativas internas e internacionales. (Cubides, 2016).

En desarrollo de la línea jurisprudencial ya zanjada, doctrinariamente se han estructurado varios conceptos de Co.Co., entre ellos Quinche (2014) quien lo define como una “institución creada en el SIDH, con el fin de propender por el respeto de los principios democráticos y derechos contenidos en la Convención”. (p. 653)

En tanto Campos (2013) considera que el Co.Co., reside en el deber de los Estados, a través de quienes administran justicia, de confrontar el ordenamiento interno con los postulados de la CADH y las interpretaciones efectuadas por la Corte IDH, para determinar si la ley es inaplicable o inválida, cuando sea contraria al ordenamiento jurídico universal, con lo que se afirma el “effet utile” de la Convención.

Por su parte doctrinantes como Castro et al. (2016) han definido el Co.Co., como un instrumento de carácter global que respalda el ordenamiento jurídico del Estado en su compromiso de amparar efectivamente los derechos de sus asociados, a partir del cotejo normativo que se debe realizar entre la normativa convencional y la interna, para verificar cuál es la adecuada para una mejor garantía de derechos.

Para otros doctrinantes como Cubides y Barreto (2016) el Co.Co., constituye un mecanismo judicial instituido para velar por salvaguarda de los DDHH.

El doctrinante Sagúes (2009) precisa que tal control es un instrumento efectivo tendiente a construir un “ius commune” interamericano relativo a los DDHH, cuyo éxito se verificará de la contundencia de las decisiones de la Corte IDH, y de la aplicación que se realice por parte de las autoridades judiciales internas.

Entonces, ya fijado el concepto del Co. Co., corresponde definir su clasificación; existen dos clases; la primera de ellas, es el Concentrado, ejercido por la Comisión IDH y la Corte IDH, el cual tiene efectos erga omnes y consiste en examinar el hecho que condujo a la violación del derecho, luego de que el afectado hubiese agotado los mecanismos de defensa internos, además de garantizar la protección de derechos conlleva una indemnización. La segunda clase, es el difuso, encaminado a que los Jueces internos, en desarrollo de sus funciones de administrar justicia; realicen un minucioso análisis acerca de la compatibilidad entre la normativa nacional, la normatividad de la CADH, y la jurisprudencia de la Corte IDH. (Cubides, Sánchez y Martínez, 2016).

En Colombia, el Co.Co. difuso no es de uso exclusivo de la Corte Constitucional, por el contrario, cualquier Juez en el marco de sus funciones debe hacer una revisión integral del caso en concreto, y de ser el caso está habilitado para concordar la la normativa nacional con la convencional, interpretándola y aplicándola. Lo anterior en aras de velar por la defensa de los DDHH de los intervinientes. (Walter, 2011).

Así las cosas, podría decirse que la Corte Constitucional tiene la obligación de salvaguardar las disposiciones normativas, lo que constituye un control abstracto, ya que los jueces de la jurisdicción ordinaria en la aplicación normativa a casos concretos deben propender por el amparo de los DDHH de manera directa. (Cubides, Reyes y Castro, 2016).

El Estado, como garante de derechos debe buscar los mecanismos para tal fin, por lo que está obligado a usar el Co.Co. difuso en todas las situaciones. (Cubides, 2016). De lo anterior se deduce entonces que son los jueces nacionales, los guardianes de la convencionalidad, pues desde su actividad deben en todo caso tener presente los planteamientos de la Corte IDH y demás decisiones de carácter internacional, como quedó establecido en el caso Almonacid Arellano VS Chile, donde se mencionó que cuando se ratifica un tratado, los funcionarios judiciales están sometidos a sus postulados, sobreponiéndolos a las leyes internas. (Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile Caso Almonacid Arellano VS Chile, 2006).

Es importante precisar que el ejercicio de este control es extensivo a la actividad de todos los funcionarios del Estado y particulares que perciban vulneración de derechos fundamentales, lo que hace que las decisiones se ajusten en todo contexto a la normativa interna e internacional y por ende habilita para acudir ante la Corte IDH en caso de transgresión de derechos. (Cubides, Pérez y Sánchez, 2013).

Partiendo de todo lo anterior, es necesario verificar la relación entre el bloque de Constitucionalidad y el Co.Co., para verificar el carácter vinculante de las decisiones emitidas por la Corte IDH, ante nuestra jurisdicción. Entonces, ha de decirse que el Co.Co. guarda una estrecha similitud con el control de constitucionalidad, que se ejerce de manera concentrada por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; y de manera mixta, por los jueces y funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. (Cubides y, Chacón, 2015).

El Co.Co. es incorporado a la normatividad Colombiana a través del Bloque de Constitucionalidad (en adelante BC.), y se encuentra regulado en los artículos 9, 53, 93, 94, y 214 de la Constitución de 1991. Así, el artículo 9º estipula el trato cordial de Colombia con los demás Estados en términos de soberanía y bajo las premisas del derecho internacional. En tanto el artículo 53, determina que todos los tratados y convenios relativos al derecho laboral, ratificados por Colombia, hacen parte de legislación, aunque no todos forman parte del ordenamiento jurídico, el artículo 93, incorpora el BC y el artículo 94,

regula que los derechos consignados en la Constitución, incluso a través del mismo. En observancia de las reglas del Derecho internacional, el numeral 2 del artículo 214, proscribire la vulneración de los DDHH y libertades fundamentales.

El BC establece que en el ordenamiento interno, deberán prevalecer todos los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la República, que reconocen los DDHH; adicionalmente se entiende que los derechos contenidos en la carta Política, se interpretarán acorde al mismo. Según los planteamientos de la Corte Constitucional, el BC está integrado por reglas que sin estar consagradas de manera expresa en la constitución, se usan como lineamientos de constitucionalidad de las leyes, lo que le da rango constitucional a los mecanismos universales de DDHH. (Corte Constitucional, Sentencia C - 225 de 1995)

Así las cosas, el hecho de que Colombia hubiese suscrito tratados Internacionales obliga a los jueces, a tener en cuenta siempre los postulados de la Convención IDH y las determinaciones de la Corte IDH en sus providencias, en aras de propender por la protección de los DDHH. (Cubides et al., 2016). En ese sentido, Quinche (2009) señaló que el alcance de las sentencias de la Corte IDH, se evidencia en el contenido de la Sentencia C - 228 de 2002, en la que se tratan tres temas provenientes del SIDH, como lo son la prohibición de la impunidad en casos de transgresión de los DDHH; el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la integración del ordenamiento interno con los estándares de amparo diseñado por el SIDH.

Se puede concluir entonces que las decisiones judiciales nacionales deben ser claras y precisas y guardando siempre consonancia entre las determinaciones de la Corte IDH y el ordenamiento jurídico interno para no entrar en contradicciones jurídicas. (Cubides et al., 2016)

2. Protección de los DDHH de las mujeres a nivel Internacional

A través de la historia muchas mujeres han luchado por hacerse visibles y lograr reconocimiento de su subjetividad; lucha que inicialmente estuvo dirigida al ejercicio de la

ciudadanía, la participación política, y la instauración de la democracia. Pero es solo después de la Segunda Guerra mundial que la comunidad Internacional se ha concentrado en el fomento de la igualdad de género y de los DDHH de las mujeres como pilares del desarrollo de la sociedad, lo que ha permitido promulgar acuerdos, tratados, convenciones o protocolos internacionales sólidos, que la mayoría de los países, incluyendo Colombia, han acogido. Estos preceptos jurídicos de carácter internacional coinciden en establecer para los Estados obligaciones tales como; i.) Prescindir de ejecutar actos que transgredan a la mujeres, ii.) Trabajar para la prevención, investigación, sanción de conductas violatorias de DDHH. iii). Incorporar normatividad que respalde los derechos y facilite su restablecimiento y la reparación de los daños causados, iv). Tomar medidas de defensa frente a hechos constitutivos de vulneración de derechos. v). Establecer procedimientos efectivos para garantizar y restablecer derechos.

Partiendo de lo anterior, es importante mencionar los distintos instrumentos normativos internacionales que resaltan los DDHH de las mujeres y velan por su protección.

En el año 1948, se realizó la “IX Conferencia Internacional Americana” celebrada en Bogotá (OEA, 1948), en la que se reconocieron los derechos civiles y políticos a la mujer. Para la misma época la ONU, establece diálogos tendientes a lograr la configuración del derecho a la igualdad, la no discriminación y el pleno disfrute de los DDHH, lo que se plasmó en la “Declaración Universal de los DDHH” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). instrumento originario que visibilizó a la mujer en su esencia y la reconoció como sujeto de derecho.

La VI Conferencia Internacional Americana que se adelantó en la Habana (Cuba), creó en 1928 Comisión Interamericana de Mujeres, en respuesta de los requerimientos del movimiento feminista, que surgía en el hemisferio americano, la cual finalmente fue estructurada en 1953 “como órgano especializado de la OEA, para la promoción de los derechos civiles y políticos de la mujer.” (Morales, 1998, p. 11)

La “Convención sobre los derechos políticos de la mujer” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1952), incentivó la participación en la vida política de la mujer, consagrando el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas a partir de lo establecido en su artículo 7°.

Además para la misma época, con el desarrollo de distintos Foros de la ONU, se identificaron grandes obstáculos en el goce efectivo de los derechos de las mujeres, originados en las diversas clases de violencias contra ellas ejercidas. (Londoño. 2001). Por su parte la “Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1957) reconoció a la mujer el derecho a mantener su nacionalidad, resaltó su condición jurídica, así como garantizó el acceso a la educación, el empleo y las actividades económicas y sociales, sin restricción alguna.

La “Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1974) contempló la proscripción de agresiones contra las mujeres y los niños, la prohibición del empleo de armas químicas y bacteriológicas en el contexto del conflicto armado, por constituir esto una violación al Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949. Así como la prohibición de la comisión de delitos como la tortura, los castigos colectivos, la ejecuciones, entre otros, por parte de los actores del conflicto. (OCACNUDH, 2012). Dicha Declaración exige a los gobiernos de cada Estado proporcionar las herramientas necesarias para la formación y sensibilización de sus funcionarios en todo orden, a fin de erradicar la violencia contra la mujer, con ello se propende por su protección y se la garantía del tratamiento integral a las víctimas.

La “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” fue instituida en la Asamblea General de la ONU, en 1979, lográndose el reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres, lo que significó un gran avance para los DDHH. Es así como a través de la Conferencia Mundial de DDHH de 1993, celebrada en Viena tras una lucha desenfadada se reconoció como DDHH, los derechos de las mujeres y además se estableció que estos son inherentes a los DDHH.

(Facio, 2011).

La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979), en su Artículo 1, definió la discriminación, como toda exclusión basada en género, encaminada a la anulación de los DDHH y las libertades a favor de la mujer.

Es importante resaltar que la CEDAW fue ratificada por Colombia a través de la Ley 51 de 1981, constituyendo desde entonces la base fundamental para la defensa de los DDHH de las mujeres; y su Protocolo Facultativo se incorporó a la legislación colombiana mediante la Ley 984 de 2005, constituyendo un gran progreso en la materialización de las pautas dadas por la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, sin embargo el no haberse reconocido la competencia del Comité de Verificación de este Tratado, impide que el Estado Colombiano sea investigado por la vulneración de DDHH de las mujeres y destinatario de recomendaciones al respecto.

Por otra parte, la “Convención de Belém do” Pará, radicó su atención en este tema y fue aprobada en la “Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas, del 18 al 19 de abril de 1994”. (Bustamante y Vásquez, 2011). De igual manera y en aras de corregir la desigualdad en términos de riqueza y oportunidades, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), exhortó a los Estados a la concreción de políticas públicas (en adelante P.P.), tendientes a reconocer de la igualdad de género. (Breines, Gierycz y Reardon, 2002).

En cumplimiento de lo anterior, en 1991 Colombia consagró en su carta Constitucional el “Estado Social de Derecho”, y abrió paso a la inclusión del amplio abanico de garantías fundamentales de sus asociados, en especial de las mujeres.

3. Reconocimiento de los DDHH a las mujeres en Colombia

Es así como, el Estado Colombiano ha reconocido el valor de la mujer, por ello se ha esforzado en adecuar el ordenamiento jurídico para garantizar sus derechos de manera efectiva, así como por materializar sus postulados a través de estrategias, programas, y políticas públicas, ello encaminado a suprimir todo tipo de agresión hacia la mujer.

Con la Constitución Política de 1991 se estableció un referente normativo encaminado a tal fin, que además evidencia la incorporación de Normas Internacionales tendientes a la protección de los DDHH de las mujeres, lo cual se puede condensar de la siguiente manera:

Tabla 1. Referente normativo

Constitución Política de 1991	
Artículo 13 – Derecho a la igualdad.	La igualdad se pregona de la identidad de los iguales y la diferencia de los desiguales.
Artículo 17 – Prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas.	Las mujeres normalmente víctimas directas de este tipo de conductas, que conlleva al reconocimiento de responsabilidad penal.
Artículo 40 – Derecho a la Participación política y democrática.	La mujer en Colombia tiene derechos a la participación en igualdad de condiciones.
Artículo 42 - La familia es la esencia de la sociedad	La mujer pilar fundamental de la familia
Artículo 43 - La mujer no debe ser objeto de marginación o exclusión.	Es obligación del Estado Colombiano combatir las agresiones dirigidas a la mujer.
Artículo 93 – Bloque de constitucionalidad	Tratados Internacionales referente a la defensa de la Mujer, están integrados a la Carta Política, por lo que son de obligatorio cumplimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Constitucional de 1991.

Adicionalmente, se han creado normas que representan el gran esfuerzo del Estado Colombiano por reconocer la igualdad de género y los DDHH de las mujeres, entre las que se destacan:

- **Ley 51 de 1981.**

A través de esta se adopta la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de agresión contra la mujer” – Se establecen medidas encaminadas a erradicar la discriminación y promover el derecho a la igualdad de la mujer en la sociedad. (Roa, Torres, y Gómez, 2009).

- **Ley 248 de 1995**

Mediante la cual se aprueba la Convención Belem do Pará, incluida en el ordenamiento jurídico Colombiano para cumplir con su deber internacional de erradicar la violencia contra la mujer. (Espinosa, Oyuela y Tapias, 2003).

- **Ley 294 de 1996**

Mediante la cual se crean medidas para suprimir la violencia intrafamiliar, por lo que se enfocó en la violencia contra la mujer en el entorno familiar y se concretó un tratamiento integral frente a la misma. (García, 2003)

- **Ley 575 del 2000**

Mediante la cual se modificaron algunos apartes de la Ley 294 de 1996, pues se abrió la posibilidad de permitir que la comunidad denuncie el maltrato hacia la mujer. (García, 2003)

- **Ley 599 del 2000**

Denominada Código Penal, en el que se consagraron tipos penales que sancionan comportamientos atentatorios de los DDHH de las mujeres, como los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y el feminicidio como delito autónomo.

- **La Ley 882 de 2004**

Que modificó el artículo 229 del Código Penal, y cambió la connotación del delito de “violencia intrafamiliar”, aumentó la pena en casos en los que maltrato va dirigido a un

menor o una mujer; además de crearse el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales. (Estrada, 2011).

- **Ley 1257 de 2008**

Ley orientada a exterminar los atentados contra la mujer incluyendo definiciones orientadoras para lograr dicho fin, prestando especial atención al concepto de violencia en los diferentes ámbitos. (Murillo y Muñoz, sf.).

- **Ley 1542 de 2012**

Con esta ley se busca la erradicación de la violencia en el medio familiar, eliminándolo en el ámbito de la investigación como delito querellable, así como su desistimiento, teniendo la Fiscalía la obligación de investigar aunque no se verifique el interés de la víctima en continuar. (Vanegas, 2016)

- **Ley 1761 de 2015**

(Ley Rosa Elvira Cely) – Consagra el delito de feminicidio, consta de 13 artículos en los que se define el delito, se reconocen circunstancias de agravación punitiva y se establecen medidas para que las investigaciones se realicen teniendo en cuenta los parámetros de la debida diligencia. Además de ocuparse de medidas preventivas a partir de la creación de cátedras de género, formación en DDHH a funcionarios públicos, entre otras. (Sefair, 2018)

- **Ley 1773 de 2016**

(Ley Natalia Ponce de León). Ley orientada a suprimir el acto de lesionar a otra persona con el uso de ácidos o químicos. Asume el delito de ataque con sustancias químicas como delito autónomo y endurece las penas relativas a dichos ataques. (Muñoz, 2017)

- **Ley 1826 de 2017**

A través de la cual se crea la llamada “ley de pequeñas causas” o de “procedimiento abreviado” cuyo fin es combatir el fenómeno de la congestión judicial, pues existe un sin número de procesos acumulados y pendientes por resolver a causa de los altos índices de

delincuencia. En relación con las conductas atentatorias de los DDHH de la mujer se investigarán de oficio en consonancia con el artículo 5 de la normativa. (Balcázar, 2017)

Este compendio normativo es el fruto del esfuerzo realizado por el Estado Colombiano para cumplir con su obligación de eliminar toda agresión dirigida a la mujer. Sin embargo para tal fin aún se requiere de la creación de mecanismos mediante los cuales se materialicen los postulados normativos, haciéndose necesaria la implementación de P.P., que en el caso de las P.P. de Equidad de Género, han sido instituidas como garantía de los DDHH, a fin de brindar una atención adecuada en defensa de las mujeres con condiciones especiales. (Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, 2016).

Dichas P.P., están basadas en principios constitucionales, tales como: la igualdad, no discriminación, el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad, la autonomía, el empoderamiento, la participación, la corresponsabilidad y la sostenibilidad, los cuales sirven de guía para la implementación de estrategias tendientes a la eliminación de agresiones contra la mujer.

En Colombia, los diferentes gobiernos nacionales han elaborado diferentes P.P., se formuló en 1992 la P.P. “Integral para la Mujer; en 1994, la P.P. de Participación y Equidad y de la Mujer (EPAM); en 1999, se creó el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; y en el año 2003, la P.P. denominada “Mujeres Constructoras de Paz””. (Michelsen, 2012).

Así mismo, se han creado diferentes entidades encargadas de manejar las temáticas de género, entre ellas la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia; la Dirección de Equidad para la Mujer y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (en adelante CPEM), esta última de la mano con organismos de carácter nacional y departamental, desde el año 2008, han programas encaminados a asegurar los DDHH de las mujeres, entre las que se resalta el “programa integral contra violencias de género”, así mismo ha impulsado la apertura de espacios de concertación interinstitucional para la supresión de violencias, logrando en el año 2010, la creación de la “Comisión

Interinstitucional de Violencias contra las Mujeres” y la conformación de Mesas Departamentales con la misma finalidad. (Michelsen, 2012).

El Estado Colombiano a través de la CPEM adicionalmente ha creado estrategias tendientes a activar la P.P. de equidad de género en todo el territorio Colombiano, de las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Incentivar las oportunidades laborales de la mujer en condiciones de igualdad, ya que son evidentes profundos estigmas acerca del tema.

- Promover la conciliación de la vida familiar y laboral; estrategia que permite evidenciar la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos y permite un balance de actividades. (Ministerio de Igualdad, 2010).

- Implementación de acciones encaminadas a la defensa de las mujeres víctimas de violencias con ocasión al conflicto armado, y su efectiva reparación, para lo cual se requiere la cooperación interinstitucional y territorial. (Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, 2016).

- Estimular la participación de las mujeres en las instancias de poder, así como en la toma de decisiones de manera equitativa, permitiendo el acceso al poder público a las mujeres. (OAG, 2011). Según los registros de la ONU MUJERES, en Colombia la participación política de las mismas entre 2016 y 2018, no supera el 20%, teniéndose como cifras: el 15,6% a nivel de gobernaciones, el 12,2% a nivel de alcaldías, el 16,7% en cuanto a los cargos de diputados, y el 16.6% de consejales del país. (ONU Mujeres, 2017)

- Creación de P.P. sectoriales que garanticen la salud sexual y reproductiva para adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la seguridad materna, entre otras. (Minsalud, 2012).

- Garantizar la educación con enfoque diferencial, para lo cuál el Estado deberá implementar acciones como el otorgamiento de becas para acceder a universidades y colegios de alta calidad, respetando el derecho a escoger el nivel de estudio que se pretende alcanzar. (Dominguez, 2004)

De lo expuesto en líneas anteriores, debe decirse que Colombia cumple parcialmente con los estándares de Co. Co. establecidos por la CIDH, en el sentido que su ordenamiento jurídico y los mecanismos establecidos y aplicados para su materialización, como las P.P. implementadas por los distintos gobiernos, por si solos no son suficientes, toda vez que se hace necesario fortalecer las diferentes instituciones destinadas a esta tediosa actividad de salvaguarda de los DDHH de las mujeres, para que se cumpla a cabalidad con los fines y la esencia las anteriores, siendo importante además tener presente que los servidores públicos a quienes se les ha encomendado la labor materializar tanto de las normas como los mecanismos de defensa de derechos, estén permanentemente abiertos a la investigación y el estudio de los avances normativos, jurisprudenciales y doctrinarios sobre el alcance de los DDHH, en este caso de las mujeres, quienes gozan de especial protección Constitucional, para que los mismos no sean letra muerta.

Conclusiones

El Co.Co. es un instrumento de salvaguarda diseñado para hacer valer DDHH consagrados principalmente en los tratados internacionales, a través de la Corte IDH.

En el desarrollo de la investigación, se determina que la Corte IDH, jurisprudencialmente ha indicado que las Instituciones estatales realizan el Co.Co. en conjunto con las instituciones que conforman las diferentes ramas del poder estatal.

El Estado Colombiano ha suscrito y ratificado varios tratados internacionales, lo que lo hace acreedor de obligaciones internacionales establecidas, a fin de asegurar el amparo de los DDHH de las mujeres.

Para cumplir esa obligación internacional de propender por la salvaguarda de los DDHH de las mujeres y erradicar toda agresión dirigida éstas, el Gobierno Colombiano se ha blindado en su ordenamiento jurídico con la expedición de un sin número de normas desde los postulados de su Carta Política y el BC incorporado a la misma, en las que establece específicamente los derechos reconocidos a la mujeres, las conductas que transgreden estos derechos y que constituyen formas de violencia y discriminación, además de los mecanismos jurídicos tendientes a su efectiva protección, como es el caso de las P.P. de Equidad de género.

Pero, a pesar de la amplia normatividad que para el efecto se ha establecido, no se ha logrado materializar los DDHH de las mujeres de manera concreta, toda vez que se requiere el fortalecimiento de la diferentes instituciones que tienen en cabeza dicha función y la capacitación constante de los servidores públicos y funcionarios del Estado encargados de dar aplicación a las normas y a los mecanismos desarrollados para tal fin, lo anterior para cumplir con el control de convencionalidad impuesto por el SIDH.

Además, para lograr con estos postulados se hace necesario empezar desde los hogares, impartiendo a nuestros hijos una educación basada en valores y así contribuir con la eliminación de agresiones contra la mujer, pues esta no es una tarea que sólo le compete al Estado, sino también a la sociedad en general.

REFERENCIAS

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1952) *Convención sobre los derechos políticos de la mujer Resolución 640 (VII)*, 20 de diciembre de 1952. Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc#:~:text=Las%20mujeres%20tendr%C3%A1n%20derecho%20a,los%20hombres%2C%20sin%20discriminaci%C3%B3n%20alguna.&text=Las%20mujeres%20ser%C3%A1n%20elegibles%20para,los%20hombres%2C%20sin%20discriminaci%C3%B3n%20alguna.>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1957). *Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. Resolución 1040 (XI)*, de 29 de enero de 1957. Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278.>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1974). *Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Resolución 3318 (XXIX)*, de 14 de diciembre de 1974. Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979). *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Resolución 34/180*, de 18 de diciembre de 1979. Recuperado de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1994) *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 48/104* del 23 de febrero Recuperado <https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17cdd7e8-d185-4812-91bf-9833247fbc11/7-r48-104.pdf?guest=true>.

- Alonso, M. (2000). La facultad del juez ordinario de inaplicar la ley interna posterior contraria al derecho comunitario. *Revista de Administración Pública.*, 138, 203-224.
- Balcázar, L. D. (2017). *El nuevo procedimiento penal abreviado dispuesto por la Ley 1826 de 2017 como mecanismo para aliviar la congestión judicial en Colombia.* (Trabajo de Grado).. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15036>.
- Breines, I., Gierycz, D. y Reardon. B. (2002). *Mujeres a favor de la paz: hacia un programa de acción.* Madrid: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.
- Bustamante y Vásquez, P. A. (2011). La convención Belém Do Pará un balance de su aplicación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a 16 años de su entrada en vigor. *Civilizar*, 11(20), 15-36. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-89532011000100003&script=sci_abstract&tlng=es.
- Campos, M. G. (2013). El control de convencionalidad en la jurisdicción chilena la superación de los problemas de su aplicación. *Revista de Derechos Fundamentales*, 10, 55- 83. Recuperado de <file:///C:/Users/Amalitas/Downloads/Dialnet-ElControlDeConvencionalidadEnLaJurisdiccionChilena-4754540.pdf>.
- Castro, C., Cubides, J. y Martínez. A (2016). La génesis del control de convencionalidad: El ejercicio del control de convencionalidad difuso (CCVD) por parte del Consejo de Estado Colombiano 2006-2014. El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. *JUS Público*, 17, 15-49. Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/18601/1/El-control-de-convencionalidad_Cap01.pdf

Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer. (2016). *Protección derechos de las mujeres en contextos de conflicto armado*. Recuperado de <http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/mvca/Políticas-publicas-mujeres-victimas-conflicto-armado.pdf>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. (2003, 25 noviembre). *Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, Caso Mack Chang vs. Guatemala*, Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_garcia_101_esp.doc

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH (2004, 7 septiembre) *Voto concurrente razonado Juez Sergio García Ramírez, Caso Tibi vs. Ecuador*. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos .Corte IDH. (2006, 26 septiembre) *Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, Caso Vargas Areco vs. Paraguay*. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_155_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH (2006, 26 septiembre). *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf.

Cubides J. (Ed). (2016). *El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Bogotá D.C., ed. Universidad Católica de Colombia. Colección JUS Público N° 17. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14400/4/control-de-convencionalidad.pdf>

Cubides, J. y Barreto, P. (2017). Positivización del ordenamiento convencional interamericano en Colombia. En. *Derecho Procesal Constitucional. Codificación Procesal Constitucional*, (pp. 661-680). Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica.

- Cubides, J. y Chacón, N. (2015). El control de convencionalidad (CCV): retos y pugnas. Una explicación taxonómica. *Revista Académica y Derecho*, 11 (6), 53-94
Recuperado de <http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/86/80>
- Cubides, J., Pérez, C. & Sánchez, N. (2013). El nuevo control difuso de convencionalidad como mecanismo para la protección de los derechos humanos. *Revista Rostros y Rastros*, 10, 46-54.
- Cubides, J., Reyes, D. y Castro, C. (2016). El control de convencionalidad (CCV) y sus relaciones con la fuerza pública en Colombia. Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana. *JUIS público*, 18, 107-123.
Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/18443/1/Analisis-y-aplicacion-derechos-humanos_Cap04.pdf
- Cubides, J., Sánchez, M., y Martínez, A. (2016). La implementación de parámetros convencionales en la justicia constitucional colombiana. El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos *JUS Público*, 17, 147-164 . Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/18611/1/El-control-de-convencionalidad_Cap05.pdf
- Domínguez B., M. E. (2004). Equidad de género y diversidad en la educación colombiana. Recuperado de <file:///C:/Users/docente/Downloads/5205-3097-1-PB.pdf>
- Espinosa, B., Oyuela, L., y Tapias, N. (2003). *Concepto Sobre La Ratificación Del Protocolo Facultativo De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer*. *Vniversitas*, 52(105), 651-688.
Recuperado a partir de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14860>

Estrada, L M. (2011). Políticas públicas de género. *Diálogos De Derecho Y Política*, (6), 43-62. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/derypol/article/view/99>

Eto, G. (2014). La inconvencionalidad por omisión: una aproximación conceptual. En J. L. Cáceres (Coord.). *Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional*. Perú: Adrus D & L Editores.

Facio, A., (2011). Viena 1993, cuando las mujeres nos hicimos humanas. Fundación Justicia y género. Guatemala. *Pensamiento iberoamericano*, 09, 3-20. Recuperado de Facio, A., (2011). Viena 1993, cuando las mujeres nos hicimos humanas. Fundación Justicia y género. Guatemala.

Fromont, M. (2002). El control de constitucionalidad ejercido por las jurisdicciones ordinarias francesas. *Pensamiento Constitucional*, 8(2), 369-382. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3282>

García Otero, M.C., (2003). *Del cómo la violencia contra las mujeres se (des) eterniza y se convierte en un asunto público. Análisis del proceso en Colombia*. (Trabajo de Grado.). Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Departamento de Ciencias Sociales. Universidad del Valle. Colombia. Recuperado de <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/3769/CB-0461319.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Londoño, A., (2001). *Derecho a los Derechos*. UNFPA.

Michelsen. C. (2012). Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Bogotá D.C.: Recuperado de https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_colombia_0446.p

Ministerio de Igualdad, E. (2010). *Conciliación de la vida laboral, familiar y personal*.

Madrid. Gobierno de España- Recuperado de
<https://ib.ccoo.es/59dcfc524039611a7b562ebb78c9cd00000061.pdf>

Ministerio de Salud. (2012). *Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos*. Recuperado de
<https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimension-sexualidad- derechos-sexuales-reproductivos.pdf>

Morales, J. (1998). *Historia de la Comisión Interamericana de Mujeres (1928-1997)* CIM/OEA, Washington, D.C., pg. 11.

Muñoz Morales, K. (2017). *Caso Ponce de León: los alcances y la relevancia jurídica de la Ley 1773 de 2016*. (Trabajo de Grado). Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia Bogotá, Colombia. Recuperado
<https://repository.ucatolica.edu.co/jspui/handle/10983/15792>

Murillo, A. y Muñoz, L. (s.f.) Tratamiento penal de la violencia contra la mujer en Colombia. *Revista nuevas miradas y enfoques de diversas investigaciones.*, 29-53. Recuperado de
<https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/926/TEMA%202%20NUEVAS%20MIRADAS%20II-29-54.pdf;jsessionid=7678F332A39A2E974F1C064ADC0F4077?sequence=1>.

Organización de los Estados Americanos OEA. (1948). *Novena Conferencia Internacional Americana* Bogotá. Recuperado de
<https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/NinthIntConfAmericanStates/Treaties/DeclaraciondelosDerechosyDeberesdelHombre.pdf>

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OCACNUDH], (2012). *Derechos de la mujer*. Bogotá: OCACNUDH.

ONU MUJERES, C. (2017). *Colombia 50/50 en 2030. Liderazgo y participación política*: Recuperado de

<http://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2016/12/colombia-50-50>.

Organización de los Estados Americanos OEA (1994, 9 junio). *Convención Belém do Pará. Convención interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer*. Belém do Pará. Brasil: OEA. Recuperado de <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf>

Quinche, M. F., (2009). El control de convencionalidad y el sistema colombiano - *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, 163 (12), 163-190. Recuperado de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25586.pdf>

Quinche, M. F. (2014). El control de convencionalidad como control normativo no como control simplemente erudito o formal. En E. A. Velandia (Ed.). *Derecho Procesal Constitucional*. Tomo V, (1ª ed.). (pp. 653- 673). Bogotá D.C.: Velandia Canosa Editores Ltda.

Roa, M., Torres, R. y Gómez, C., (2009). Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) en las altas cortes nacionales: Estudio comparado Colombia, Argentina y Perú. *Revista Derecho, Legislación y políticas Públicas*. 7, 52-81. Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52912>

Sagüés, N.P. (2009). El “Control de convencionalidad”, en particular sobre las constituciones nacionales. *Revista La Ley*, 761 – 767. Recuperado de http://www.joseperezcorti.com.ar/Archivos/DC/Articulos/Sagues_Control_de_Convencionalidad_LL_2009.pdf

Sefair Morales. R. (2018). *Ni una menos movilización socio legal y la sanción de la ley de feminicidio Rosa Elvira Cely*. (Trabajo de grado). Facultad de Derecho Universidad del Rosario. Bogotá D.C. Recuperado de <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/17798>

Vanegas Mosquera, J. O. (2016). *La violencia intrafamiliar a partir de la Ley 1542 de*

2012: análisis desde el derecho a la familia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tesis de Grado.. Maestría en Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/7687>

Walter F.C., (2011). La diferenciación entre control de constitucionalidad, control de convencionalidad y control de compatibilidad - *Anuario Iberoamericano de justicia Constitucional*, 15, 51-66

Normatividad.

Constitución Política de Colombia (1991). *Revisada y actualizada*. (Edición especial preparada por la Corte Constitucional. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>

Ley 51 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980, Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 35.794 del 7 de julio de 1981. Recuperado de <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1605470>

Ley 248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 42.171., de 29 de diciembre de 1995. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0248_1995.html

Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 42.836, de 22 de Julio de 1996, Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0294_1996.html

Ley 575 del 2000, por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 43.889, de 11 de febrero de 2000. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0575_2000.html

Ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 44.097 de 24 de julio de 2000 Recuperado de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html

Ley 984 de 2005 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 46.002 de 16 de agosto de 2005 Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0984_2005.html

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 47.193 de 4 de diciembre de 2008. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html

Ley 1542 de 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 48.482 de 5 de julio de 2012. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1542_2012.html

Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely). Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 49.565 de 6 de julio de 2015. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1761_2015.html

Ley 1773 de 2016, por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 49.747 de 6 de enero de 2016. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1773_2016.html.

Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Bogotá: Congreso de Colombia. *Diario Oficial* 50.114 de 12 de enero de 2017. Recuperado de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1826_2017.html

Jurisprudencia

Corte Constitucional, Sentencia C - 225 de 1995. Derecho Internacional Humanitario. REF:Expediente No. L.A.T.-040. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá (18 de mayo de 1995) Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm#:~:text=1%C2%BA.,convicciones%20y%20sus%20pr%C3%A1cticas%20relegiosas..>